

La paz en Euzkadi, cada vez más lejana

Danilo TRELLES

MADRID, 25 de agosto. ¹⁸⁶ Las interminables discusiones entre los gobiernos central y vasco acerca de los métodos para conducir la lucha antiterrorista, han tenido un nuevo brote luego de la rocambolesca acción de ETA que estuvo a punto de reducir a polvo el edificio del Ministerio de Defensa en Madrid. Si no ocurrió esta tragedia se debió exclusivamente a que la organización etarra no domina el sistema de desactivación de los seguros en los morteros, lo que evitó la explosión.

La discusión en que se han embarcado ahora tiene derivaciones semánticas. El gobierno que preside Felipe González, luego de negar durante largo tiempo la existencia de contactos con ETA, los admite ahora pero se niega a adjudicarles el carácter de negociación.

Ambos gobiernos están de acuerdo en la necesidad de combinar las medidas policiales con las políticas y rechazan al mismo tiempo cualquier salida negociada que vulnere el marco del estatuto autonómico y de la constitución.

Hubo, aparentemente, una especie de acuerdo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apoyando el acuerdo unánime del parlamento vasco que adjudica la negociación política a los partidos vasco —incluido Herri Batasuna— dejando al Ministerio del Interior y a la propia ETA, el acuerdo sobre la entrega de armas y la reinserción de todos sus activistas. Sin embargo, y pese a los contactos mantenidos recientemente por ambos gobiernos con ETA-Militar, las declaraciones que acaba de realizar el presidente vasco José Antonio Ardanza, han vuelto a reavivar el debate. Este ha afirmado enfáticamente: "ETA quiere el diálogo y la negociación y el gobierno de Madrid, no".

Para complicar aún más las cosas, el secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea le ha salido al paso declarando que el gobierno vasco no sólo desea la negociación, sino que la obstaculiza".

Las nuevas discusiones han vuelto al reciente episodio de la expulsión de Francia del presunto máximo dirigente etarra, Domingo Iturbe Abasolo. El gobierno vasco y el PNV consideran que esta medida decreta el estancamiento de las negociaciones al retirar de ellas un interlocutor privilegiado.

A pesar de que Felipe González haya rechazado enfáticamente la existencia de negociaciones con ETA, no puede negarse a estas alturas que esos contactos se hayan producido. El hecho de que posteriormente aquella haya sugerido la intervención del gobierno vasco, califica la versión de que luego tratarán de lograr la participación de un mediador que sirviera de conexión con Madrid. Lo que no quiere decir que ETA otorgue su confianza al PNV, cuya intervención esti-

man ventajosa en estos momentos para obligarlos a asumir un compromiso frente al pueblo vasco.

La situación es compleja, como puede verse, y existen una serie de condicionantes que es preciso analizar. Las autoridades del gobierno central han tenido que aceptar la existencia de contactos, pero se niegan a darles la categoría de negociaciones. La palabra parece que provoca más que resistencias, incluso temores entre los responsables del ejecutivo, divididos en cuanto a los caminos a seguir para lograr erradicar la violencia en el país vasco.

Encabeza la lista de los reticentes el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general Casinello, quien ha llegado a afirmar que prefiere el terrorismo a la alternativa de un acuerdo con ETA.

Para nadie es un secreto el interés del Mercado Común y de sus poderosas razones a la hora de ver a España en su seno. Para que dejen de haber refugiados políticos en Francia y se acabe un problema que si para los españoles representa el terrorismo, para Europa atañe a su propia seguridad.

Por parte de ETA, su interés en la negociación es evidente. Lo demuestra la abundante documentación recogida en algunas operaciones policiales, en las que se señala la necesidad de abrir brechas que posibiliten el avance de la alternativa KAS por ellos propuesta. La organización etarra que había comenzado exigiendo la independencia del país vasco, ha flexibilizado luego su actitud, al abandonar aquella reivindicación. Pero la dificultad mayor con la que tropiezan las negociaciones es la exigencia de que todos los presos sean liberados.

Los líderes socialistas se mueven entretanto en un mar de contradicciones. Hace 4 años, desde la oposición, las afirmaciones sobre el problema eran tajantes: "Con toda la responsabilidad que ello comporta desde el punto de vista político, debo decir que soy partidario de negociar con ETA", afirmaba Felipe González, el 15 de mayo de 1978. Mientras que Alfonso Guerra, el 27 de mayo de ese mismo año, declaraba: "En un Euzkadi democrática y autónoma, todos tienen derecho a expresar sus opiniones y sus proyectos políticos, sociales o económicos, sobre la base del respeto a las posiciones de los demás. Bajo estas coordenadas, la negociación con ETA no sólo es posible, sino necesaria".

No puede anticiparse ahora cuál puede ser la suerte de estas negociaciones. Las posiciones están crispadas nuevamente, porque de una parte existe la desconfianza acerca de qué cartas maneja el gobierno y por qué parte de éste no termina de definirse una disposición al diálogo que abra un camino para la paz.

Existe además un factor externo: el GAL (Grupo Antiterrorista de Liberación), cuya conexión con ciertos sectores de la Guardia Civil se ha denunciado muchas veces, que no quieren la paz en el Euzkadi sino el exterminio de los enemigos.